



Roj: **STS 1262/2024 - ECLI:ES:TS:2024:1262**

Id Cendoj: **28079120012024100188**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Penal**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **29/02/2024**

Nº de Recurso: **1265/2022**

Nº de Resolución: **190/2024**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **SUSANA POLO GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 11654/2021,**  
**STS 1262/2024**

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Penal**

#### **Sentencia núm. 190/2024**

Fecha de sentencia: 29/02/2024

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

Número del procedimiento: 1265/2022

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 28/02/2024

Ponente: Excm. Sra. D.<sup>a</sup> Susana Polo García

Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCION N. 7

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Tomás Yubero Martínez

Transcrito por: AGA

Nota:

RECURSO CASACION núm.: 1265/2022

Ponente: Excm. Sra. D.<sup>a</sup> Susana Polo García

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Tomás Yubero Martínez

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Penal**

#### **Sentencia núm. 190/2024**

Excmos. Sres. y Excm. Sra.

D. Manuel Marchena Gómez, presidente

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

D. Pablo Llarena Conde

D.<sup>a</sup> Susana Polo García

D. Javier Hernández García

En Madrid, a 29 de febrero de 2024.

Esta sala ha visto el recurso de casación nº 1265/2022, interpuesto por **D<sup>a</sup>. Macarena**, representado por la procuradora D<sup>a</sup>. Patricia Rosch Iglesias, bajo la dirección letrada de D. Roberto Colmenarejo Jover, y por **D. Jesús María**, representado por el procurador D. José María Torrejón Sampedro, bajo la dirección letrada de D. Justo Conde González, contra la sentencia nº 597/2021, de fecha 3 de septiembre de 2021, dictada por la Sección nº 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el Rollo Sumario nº 5/2019-J, dimanante del Procedimiento Sumario nº 1/2018, del Juzgado Instrucción nº 1 de Cerdanyola del Vallés, por delitos de lesiones del artículo 149 CP, delitos contra la integridad moral de los artículos 175 en relación al 177 CP, lesiones de los artículos 147.3 y 147.2 CP y delitos de atentado a la autoridad de los artículos 550.1 y 2 en concurso ideal con delitos de lesiones leves del artículo 147.2 CP.

Han sido parte recurrida D. Juan Miguel, D<sup>a</sup>. Noelia y **AYUNTAMIENTO DE MONTCADA Y REIXAC**, representado por la procuradora D<sup>a</sup>. Susana Clemente Mármol.

Interviene el **MINISTERIO FISCAL**.

Ha sido ponente la Excm. Sra. D<sup>a</sup> Susana Polo García.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** El Juzgado de Instrucción nº 1 de Cerdanyola del Vallés, instruyó el Procedimiento Sumario nº 1/2018, una vez concluso lo remitió al Sección nº 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona, para su enjuiciamiento en el Procedimiento Sumario nº 5/2019-J, quien dictó Sentencia nº 597/2021, de fecha 3 de septiembre de 2021, que contiene los siguientes **HECHOS PROBADOS**:

"1.1. El día 9 de marzo de 2015 sobre las 17 horas agentes de la Policía Local de Montcada i Reixac y agentes de la Guardia Civil SEPRONA, todos ellos debidamente uniformados y en el ejercicio de sus funciones, acudieron al huerto sito en el punto kilométrico 9 de la carretera BV 5001 en el término municipal de Montcada i Reixac para comprobar el estado de unos caballos. Al llegar a dicho huerto y mientras trataban con el Sr. Jesús María, mayor de edad, sin antecedentes penales a efectos de reincidencia y dueño del huerto así como de los caballos que debían ser revisados, quien no quería franquearles el paso, la agente de la Policía Local Dña. Noelia entreabrió una puerta, produciendo un sonido fuerte y produciéndose seguidamente un altercado entre ella y la hija del Sr. Jesús María, Dña. Sabina, no encausada, altercado en el curso del cual se vio la agente Sra. Noelia auxiliada por su compañero el agente con número NUM003 .

1.2. Simultáneamente y al ver ese incidente, la madre de la joven implicada, la procesada Dña. Macarena, se dirigió rápidamente y gritando que dejaran a su hija, hacia donde ésta se hallaba. Para impedirle el paso, el agente de la policía local D. Juan Miguel se situó en su camino con los brazos en alto, ordenándole que se detuviera. La Sra. Macarena lo arrolló, cayendo ambos al suelo y haciéndolo en mala postura la Sra. Macarena, motivo por el que sufrió lesiones en su rodilla derecha consistentes en luxación traumática por caída en valgo forzado, fisura del menisco interno, rotura del ligamento cruzado anterior y posterior y del complejo colateral, lesión del nervio ciático poplíteo interno y parte del externo y ausencia de flujo en la arteria poplíteo derecha. En la caída al agente Sr. Juan Miguel se le rompió la pantalla del móvil.

1.3. Al ver a su esposa en el suelo y quejándose fuertemente, el Sr. Jesús María, sabiendo que se trataba de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, entró en el huerto diciendo "voy a coger una escopeta y os voy a matar a todos" y salió del interior del huerto con una horca de cinco puntas, dirigiéndola de forma amenazadora hacia los agentes e incluso tratando de clavársela al agente con número de identificación NUM000 (Sr. Eduardo) a la altura del torso, alcanzándole en el brazo derecho. El agente sufrió lesiones consistentes en erupción cutánea en la cara interna del brazo derecho, lesiones que sólo precisaron una asistencia facultativa, con una curación completa en 3 días de los que 1 fue impeditivo para sus tareas habituales sin secuelas. El perjudicado reclama."

**SEGUNDO.-** La Sección nº 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó el siguiente pronunciamiento:

"Que **DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS** a D. Jesús María como autor responsable de un delito de atentado agravado en concurso ideal con otro de lesiones leves de los artículos 550.1 y 2 y 551.1º CP, 77 y 147.2 CP, concurriendo la atenuante analógica simple de arrebató u obcecación del artículo 21.3º en relación al 21.7º CP, imponiéndole la pena de prisión de 3 años y 1 día con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena del artículo 56 CP y pena de multa de 1 mes con cuota diaria de 4 euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos

cuotas impagadas del artículo 53 CP, debiendo indemnizar al Sr. Eduardo por las lesiones en el importe de 150 euros, cantidad que devengará el interés legal del artículo 576 LEC desde sentencia y hasta completo pago.

Se imponen al acusado 1/5 de las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.

Que DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a D. Juan Miguel, Dña. Noelia, D. Eduardo y Dña. Macarena de las infracciones que se les venían imputando en los presentes autos con declaración de las costas de oficio en relación a todos ellos.

Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las demás partes, haciéndoles saber que contra la presente cabe la interposición de recurso de APELACIÓN que deberá, en su caso, presentarse ante esta Sección 7ª de la Audiencia Provincial, en el plazo legal desde su última notificación."

**TERCERO.-** La Sección nº 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 19 de noviembre de 2021, dictó auto de aclaración con los siguientes Antecedentes de Hecho y Parte Dispositiva:

-ANTECEDENTES-

"ÚNICO.- En la causa anotada al margen se dictó sentencia en fecha 3 de septiembre de 2021 y tras su notificación a las partes la defensa del condenado Sr. Jesús María presentó escrito con entrada en fecha 17 de noviembre de 2021 interesando la rectificación del tipo de recurso que cabe contra la resolución dictada, entendiéndose que la mención a la apelación obedeció a un error material manifiesto dada la fecha de incoación del procedimiento en fase de diligencias previas, previa a diciembre de 2015 y por tanto a la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley 41/2015."

-PARTE DISPOSITIVA-

"Que ESTIMANDO la pretensión de rectificación/aclaración deducida por la acusación particular, se sustituye en el fallo de la sentencia dictada la mención a la apelación por la casación.

Se mantiene el contenido íntegro de la sentencia en lo no afectado por la variación arriba recogida.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio del que aún cupiera, en su caso, contra la resolución definitiva a la que la petición de aclaración/rectificación hace referencia."

**CUARTO.-** Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por las representaciones procesales de Dª. Macarena y D. Jesús María, que se tuvieron por anunciados remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para sus sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

**QUINTO.-** Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, las representaciones legales de los recurrentes formalizaron los recursos alegando los siguientes **motivos de casación**:

#### **RECURSO Macarena**

Motivo Primero.- Infracción de ley al amparo de lo establecido en el artículo 849.2º por error en la valoración de la prueba en relación con documentos obrantes en las actuaciones.

Motivo Segundo.- Infracción de ley del artículo 849.1º de la ley de enjuiciamiento criminal por falta de aplicación del artículo 149 del Código Penal.

#### **RECURSO Jesús María**

Motivo Primero.- Por infracción de precepto constitucional al amparo de artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia previsto en el artículo 24 de la Constitución.

Motivo Segundo.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del principio acusatorio que deriva del derecho fundamental al proceso debido, y del principio de congruencia y defensa previsto en el artículo 24.2 de la Constitución Española.

Motivo Tercero.- Por infracción de Ley, al amparo del apartado 1 del artículo 849 de la L.E.Crim., por no haber sido aplicadas las eximentes del artículo 20, 1º y 4º del Código Penal, consistente, la primera de ellas, en cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, sin comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; y la segunda consistente en haber obrado en defensa de la persona o derechos propios o ajenos. Este motivo se alega con carácter subsidiario.

Motivo Cuarto.- Por infracción de Ley, al amparo del apartado 1 del artículo 849 de la L.E.Crim., por no haber sido aplicada como muy cualificada la atenuante del artículo 21. 3º del Código Penal, consistente en obra el Sr. Jesús María por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebató, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. Este motivo se alega con carácter subsidiario al anterior.

**SEXTO.-** Conferido traslado para instrucción, la representación procesal de los recurridos, **Juan Miguel , Noelia Y Ayuntamiento de Montcada y Reixac** , se dio por instruida de los recursos formalizados y por impugnados todos los motivos, solicitando su inadmisión y subsidiariamente para el caso de su admisión su desestimación. Por su parte la representación procesal de los recurrentes, **Macarena y Jesús María** , se dieron por instruidas de los recursos formalizados.

Por su parte, el **Ministerio Fiscal** manifestó quedar instruido de los recursos interpuestos, solicitando su inadmisión; la Sala lo admitió a trámite, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

**SÉPTIMO.-** Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación y deliberación prevenida el día 28 de febrero de 2024.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

Recurso de Jesús María

**PRIMERO.- 1.1.** El primer motivo se formula por infracción de precepto constitucional al amparo de artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia previsto en el artículo 24 de la Constitución.

En el desarrollo del motivo se indica que a pesar de la amplia prueba practicada no se puede considerar acreditada la participación del recurrente en los hechos que se le imputan, apoyándose en las testificales de todos los agentes de la autoridad intervinientes debiendo ser valorado el hecho de que tres de los agentes municipales también se encontraban imputados como consecuencia de la acusación formulada por el Sr. Jesús María y por su mujer, lo cual podría mediatizar sus declaraciones, además la Sentencia no da ninguna credibilidad a los tres testigos aportados por la defensa del acusado, Srs. Joaquín , Leandro y Lorenzo . Por ello, entiende que se ha vulneración el principio de presunción de inocencia.

**1.2.** Cuando se denuncia en casación la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, hemos dicho en sentencia SSTs 615/2016, de 8 de julio, 200/2017, de 27 de marzo, 376/2017 de 20 de mayo, que "ha de verificarse si la prueba de cargo en base a la cual el tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y por tanto: En primer lugar, debe analizar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquella que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad. En segundo lugar, se ha de verificar "el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia. En tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia. Bien entendido, como establece la STS. 1507/2005 de 9.12, "El único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control".

Sobre esta cuestión del control casacional de la valoración probatoria hemos recordado en la sentencia 35/2020, de 6 de febrero, con citas de las SSTs 458/2009 de 13 de abril y 131/2010 de 18 de enero; reiterando la doctrina anterior que ni el objeto del control es directamente el resultado probatorio, ni se trata en casación de formar otra convicción valorativa ni dispone de la imprescindible inmediación que sólo tuvo el tribunal de instancia. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración

distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por el tribunal de instancia.

Consecuentemente, el control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena ( SSTC. 68/98, 117/2000, SSTs. 1171/2001, 220/2004, 711/2005, 866/2005, 476/2006, 548/2007, 1333/2009, 104/2010, 1071/2010, 365/2011, 1105/2011 ).

**1.3.** El tribunal de instancia valora las pruebas practicadas de forma lógica y razonable, teniendo en cuenta como testimonios de cargo, no solo la declaración de los agentes acusados Sr. Juan Miguel ( agente NUM001 ), Sra. Noelia ( PL NUM002 ) y Sr. Eduardo ( PL NUM000 ) como pretende hacer ver el recurrente, sino de los testigos PL NUM003 , agente NUM004 , agente de la Guardia Civil -SEPRONA- con identificación NUM005 , y agente de la Guardia Civil NUM006 , que refuerzan el testimonio de los anteriores, al igual que las periciales sobre las lesiones de la Sra. Macarena y el Sr. Jesús María junto con la documental consistente en informe y vídeo aportado por el detective contratado por el Ayuntamiento de Montcada, Sr. Luis Angel , de las cuales el tribunal concluye que otorgan fiabilidad a las declaraciones de los agentes acusados sobre cómo sucedieron los hechos.

Como conclusión, indica, el análisis de las citadas pruebas otorga la coherencia, racionalidad y concordancia entre las declaraciones de los acusados Sres. Juan Miguel , Noelia y Eduardo , así como la presencia de ratificaciones periféricas y evidencias físicas de tipo objetivo derivadas de las declaraciones testificales, las periciales y la documental hacen fiable su versión sobre lo sucedido y sólidas las conclusiones que a partir de ese bloque probatorio pueden alcanzarse. Rechazando de forma motivada las declaraciones exculpatorias de los acusados Sra. Macarena y Sr. Jesús María , y de los testigos presentados por los mismos, vecinos de la zona, con declaraciones contradictorias sobre como ocurrieron los hechos, sobre todo las lesiones de la primera, incluso con aspectos relevantes de la declaración del Sr. Jesús María , que expusieron de forma contradictoria, versión de los hechos de los testigos que tampoco concuerda con las evidencias objetivas derivadas de la documentación médica existente.

Si bien la valoración de la prueba es un proceso complejo, existen pruebas que dependen de la inmediación en las que el juez o tribunal de instancia, que presencia la práctica de la prueba, es el que está en mejor posición para apreciarlas, en este caso el tribunal valora las testificales que presencié, lo que se dice y cómo se dice por los testigos, no sólo por su contenido literal, sino por su expresión gestual y por el contexto de su declaración. Además, la interpretación de ese testimonio, la motivación de la percepción de ese testimonio, otorgándole credibilidad o no, o deduciendo concretas inferencias es una operación racional, que no depende de la inmediación, pero que en el caso la misma es correcta y lógica.

El motivo se desestima

**SEGUNDO.-2.1.** El segundo motivo se basa en infracción de precepto constitucional, por vulneración del principio acusatorio que deriva del derecho fundamental al proceso debido, y del principio de congruencia y defensa previsto en el artículo 24.2 de la Constitución Española.

Denuncia que, en el Juicio Oral, la Fiscalía hizo las siguientes modificaciones en su escrito de conclusiones provisionales en relación con el Sr. Jesús María en relación con el atentado (letra c) de la calificación), se introduce la mención a los artículos 550.1 y 2 y 551.1º CP y correlativamente se fija la pena para el Sr. Jesús María en 2 años de prisión, manteniendo la petición de 3 meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros, por delito leve de lesiones. En el escrito de la Acusación particular se califican los hechos como por un delito de atentado previsto y penado en el art. 550.1 y 3 CP en concurso ideal con un delito leve de lesiones del art. 147.2 CP respecto del agente con TIP NUM000 , interesando la pena de 2 años de prisión por el primer delito y 3 meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros, por delito leve de lesiones.

En cambio, la sentencia la Sentencia objeto del presente Recurso de Casación condena a Don Jesús María como autor responsable de un delito de atentado agravado en concurso ideal con otro de lesiones leves de los artículo 550.1 y 2 y 551.1º CP, 77 y 147.2 CP, concurriendo la atenuante analógica simple de arrebató u obcecación del artículo 21.3º en relación al 21.7º CP, imponiéndole la pena de prisión de 3 años y 1 día, y accesorias. La pena más elevada que se le había solicitado al acusado era de 2 años de prisión y en la sentencia se le impone una pena de 3 años y 1 día, lo que implica infracción del principio acusatorio.

**2.2.** Como ha indicado esta Sala, entre otras, en la reciente sentencia 786/2023, de 24 de octubre, el sistema acusatorio que informa el proceso penal español exige que exista la debida correlación entre la acusación y



la sentencia, de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, de proponer prueba y de participar en su práctica y en los debates, habiendo podido conocer con antelación suficiente aquello de que se le acusa; de ahí que la acusación haya de ser, además, precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula.

Con ello, el establecimiento de los hechos se constituye como la clave de bóveda de todo el sistema acusatorio y deben mantenerse de manera sustancial e inalterable, además de exigirse que la sentencia sea congruente con ellos y no introduzca ningún nuevo elemento del que no haya existido posibilidad de defenderse ( SSTS 8 Feb. 1993, 5 Feb. 1994 y 14 Feb. 1995, entre otras).

Hemos dicho, además, que el objeto del proceso penal es de cristalización progresiva y se va formateando conforme avanzan las investigaciones, pero si bien las pretensiones de las acusaciones quedan fijadas con capacidad para condicionar el desenlace jurisdiccional del hecho enjuiciado en el trámite de conclusiones definitivas, el marco fáctico que el Tribunal sentenciador no puede sobrepasar se perfila de manera esencial con ocasión de la emisión de la calificación provisional. Dado que el principio acusatorio comporta que el acusado tiene derecho a conocer la acusación de tal manera que pueda ejercer una plena defensa y contradecir los hechos que se le imputan, el derecho solo se verá satisfecho cuando las conclusiones provisionales de las acusaciones pongan en su conocimiento las actuaciones por las que el acusado puede ser condenado.

Por otro lado, observa, por todas, nuestra sentencia número 221/2022, de 9 de marzo que: "El principio acusatorio, aunque no expresamente formulado en nuestro texto constitucional, entronca de forma abierta con el derecho de defensa, con el derecho a un juez imparcial y, por extensión, con el derecho a un proceso con todas las garantías (enunciados, todos ellos, en el artículo 24.2 de la Constitución española). Naturalmente, solo conocidos los elementos fácticos que se atribuyen al acusado y el espacio normativo sustancial en el que pretenden residenciarse, es posible el ejercicio eficaz del derecho de defensa, en la medida en que mal podría defenderse quien ignora de lo que se le acusa. Si resultara posible que el órgano jurisdiccional considerase probados en su sentencia hechos sustancialmente diversos de los presentados por las acusaciones, o que calificara los mismos (o pudiera sancionarlos), sobre la base de preceptos distintos, heterogéneos o más graves, o que impusiera una pena superior a la pretendida, ninguna eficaz defensa podría ser opuesta frente a hechos desconocidos hasta entonces, frente a aspectos normativos relevantes que no hubieran sido objeto de debate, o frente a la concreta imposición de penas, más graves que las solicitadas por cualquiera de las acusaciones. Además, actuando de cualquiera de esos censurables modos, el órgano jurisdiccional mismo se estaría subrogando, por descontado indebidamente, en la posición que corresponde a las acusaciones, abandonando, por eso, su indispensable posición de imparcialidad".

En definitiva el principio acusatorio es un derecho del art. 24.2 CE dotado de un "contenido normativo complejo", el cual se desenvuelve en dos principales perspectivas: una primera, que "consiste en la exigencia constitucional de que el acusado tenga conocimiento previo de la acusación formulada contra él en términos suficientemente determinados, para poder defenderse de ella de manera contradictoria", esto es, "en sus aspectos fácticos y jurídicos"; y una segunda, que "hace referencia a la necesaria correlación que ha de existir entre la acusación y el fallo, impuesta por el deber de congruencia".

La reciente sentencia del TC 11/2022, de 7 de febrero, recogiendo y analizando otras anteriores señala que: "Y respecto de la vinculación de la sentencia de condena a la pena solicitada por las acusaciones, aclaramos nuestra doctrina previa en el FJ 6 de la misma STC 155/2009, al declarar que "solicitada por las acusaciones la imposición de una pena dentro del marco legalmente previsto para el delito formalmente imputado, el órgano judicial, por exigencia de los referidos derechos y garantía constitucionales, en los que encuentra fundamento, entre otros, el deber de congruencia entre acusación y fallo como manifestación del principio acusatorio, no puede imponer pena que exceda, por su gravedad, naturaleza o cuantía, de la pedida por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancia la causa, aunque la pena en cuestión no transgreda los márgenes de la legalmente prevista para el tipo penal que resulte de la calificación de los hechos formulada en la acusación y debatida en el proceso". En aplicación de esta doctrina se han dictado, entre otras, las SSTC 126/2010, de 29 de noviembre, FJ 3; 91/2021, de 22 de abril, FJ 10.4; 106/2021, de 11 de mayo, FJ 5.2.3 c), y 121/2021, de 2 de junio, FJ 6.2.3 c).

También, la STC 47/2020, de 15 de junio dispone que: "El acusado, ejerce el derecho constitucional de defensa sobre la concreta pena solicitada por la acusación, por los hechos imputados y la calificación jurídica que estos le merecen, y no sobre otra pretensión punitiva distinta, sin que en modo alguno le sea exigible vaticinar y defenderse de hipotéticas y futuribles penas que pudiera decidir el órgano judicial, y que excedan por su gravedad, naturaleza o cuantía de las solicitadas por la acusación. En otras palabras, la confrontación dialéctica entre las partes en el proceso y la consiguiente posibilidad de contradicción frente a los argumentos del adversario, giran exclusivamente, en lo que ahora interesa, en torno a la acusación expresamente formulada contra el imputado, tanto por lo que se refiere a los elementos fácticos de la pretensión punitiva y a su

calificación jurídica, como a las concretas consecuencias penológicas, frente a las que aquel ejerce su derecho constitucional de defensa. Así pues, ha de proscribirse la situación constitucional de indefensión que, por quiebra del principio acusatorio, padecería el condenado a quien se le impusiera una pena que excediese en su gravedad, naturaleza o cuantía de la solicitada por la acusación." ( SSTC 123/2005, FJ 4, y 155/2009, FJ 6). La imposición *ex officio* por el órgano judicial de pena que exceda de la solicitada por la acusación, resulta incluso menos armonizable con la garantía constitucional de la imparcialidad judicial en el proceso penal, al asumir funciones acusatorias que constitucionalmente no le corresponden.

Pero esta Sala ha declarado que un error material en la solicitud de la pena, por clara divergencia entre lo pedido en el escrito de acusación y la pena que señala la ley para el delito que es objeto de la acusación, no vincula al tribunal sentenciador en base al principio de legalidad, y la imposición de la pena, en su mínima extensión, no necesita ser motivada, porque no es sino una consecuencia legal. Criterio que prevaleció en el Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del 27-11-2007, que volvió a examinar el alcance del principio acusatorio respecto a aquellos supuestos en los que se omite por la acusación la pena mínima prevista por la ley, y adoptó el siguiente acuerdo: "El anterior acuerdo de esta Sala, en fecha 20-12-2006, debe ser entendido en el sentido de que el tribunal no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas por las acusaciones, siempre que la pena solicitada se corresponda con las previsiones legales al respecto, de modo que cuando la pena se omite o no alcanza el mínimo previsto en la ley, la sentencia debe imponer, en todo caso, la pena mínima establecida para el delito objeto de condena". La jurisprudencia STS 11-2008, de 11-1, recoge este último acuerdo, y en el mismo sentido las SSTS 312/2017, de 3-5; 795/2017, de 7-12.

Conforme a estos Acuerdos, resoluciones posteriores y más recientes de esta Sala, como las SSTS 492/2016, de 8 de junio; 733/2016, de 5 de octubre; o 491/2019, de 16 de octubre, han proclamado que no vulnera el principio acusatorio la aplicación de penas ineludiblemente previstas para el tipo penal por el que se hubiera sostenido la acusación, por más que estas penas hubieran sido olvidadas en la petición de condena. En tales supuestos, el Tribunal no puede eludir la obligación legal y debe suplir la omisión de pedir una pena legalmente prevista, aunque no sea posible exceder de su mínimo imponible.

Sin embargo, en nuestra reciente sentencia 823/2022, de 18 de octubre, ya nos planteamos la posibilidad de que la doctrina jurisprudencial pudiera venir condicionada por la STC 47/2020 y que el principio acusatorio obligara a no imponer pena superior a la solicitada por las acusaciones incluso en el caso de que la pena solicitada fuera inferior a la pena legalmente prevista.

Pero en los supuestos en los que el principio acusatorio y el principio de legalidad entran en conflicto, resulta inconciliable la satisfacción simultánea de ambos. Para estos supuestos el Tribunal de Garantías, lejos de haber abordado un análisis sobre la preeminencia constitucional entre ambos principios, ha proclamado que la respuesta judicial debe acomodarse a la plena observancia del Derecho de Defensa. Consecuentemente, proclama que el límite de la petición acusatoria no podrá sobrepasarse, ni siquiera para acomodar la sentencia a las exigencias del legislador, cuando el exceso comporte un vaciamiento sustantivo del espacio de defensa que corresponde al acusado.

Lo anterior provocó la sentencia de Pleno de esta Sala 173/2023, de 9 de marzo, en la que hemos dicho que "La doctrina de esta Sala obliga a imponer la pena legalmente prevista en su mínima extensión y gravamen. Consecuentemente, del mismo modo que el mínimo legal resulta del principio de legalidad y no compromete el principio de imparcialidad judicial, tampoco resiente el espacio de defensa de los acusados. Estos solo podrían defender la imposición de una pena inferior al mínimo legal, si cuestionan la calificación hecha por la acusación. Y la posibilidad de la defensa para cuestionar la pretensión de subsunción típica de los hechos formulada por la acusación, nunca está cercenada en estos supuestos. Como tampoco lo está su capacidad para cuestionar el grado de ejecución del delito o el modo de intervención de los partícipes, así como para plantear la eventual concurrencia de circunstancias atenuatorias de la responsabilidad criminal.

7.8. En consideración a lo expuesto debe revalidarse la doctrina de esta Sala plasmada en las sentencias que recogen el Acuerdo no Jurisdiccional de esta Sala de 27 de noviembre de 2007.

El principio de legalidad y la ausencia en nuestro ordenamiento jurídico de un espacio en el que se reconozca a las partes una disponibilidad de la pena fuera del marco punitivo previsto por el legislador, determina que, en aquellos supuestos en los que la pretensión punitiva de la acusación omite o no alcanza el mínimo previsto en la ley y tal defecto no sea subsanado en el acto del plenario, la sentencia debe imponer la pena mínima establecida para el delito objeto de condena, siempre que la punición en el margen no peticionado no genere indefensión para la parte; circunstancia que podría apreciarse respecto de penas accesorias o de penas facultativas, pero que no es observable respecto de la aplicación de las penas conjuntas ineludiblemente previstas, salvo que se proyecte sobre cláusulas con contenido aflictivo que vienen exigidas para fijar la pena."



**2.3.** En el supuesto, como afirma el tribunal, la Fiscalía interesó la pena de 2 años de prisión, adhiriéndose a la peticionada en su día por la acusación particular, ahora bien, la acusación pública adicionó el artículo 551.1º CP al inicio de la vista oral, modificando sus conclusiones provisionales, pero la pena la dejó en dos años de prisión cuando, pero ya sea con la regulación vigente a la fecha del hecho (modificación del CP publicada el 23 de diciembre de 2000 y en vigor desde el 24 de diciembre del mismo año) se sancionaba el tipo básico con pena de 1 a 3 años para los casos en que el sujeto pasivo era agente de la autoridad y con la superior en grado para el subtipo del artículo 552.1º CP (equivalente al actual 551.1º CP), ya por la posterior a la reforma del año 2015 por entenderla como más favorable, rebaja el límite mínimo del atentado a 6 meses y deja igual el máximo de 3 años, siendo la del subtipo agravado igualmente la superior en grado, es decir de 3 años y 1 día a 4 años, seis meses y un día, por tanto, como afirma el tribunal, la pena mínima del atentado agravado por el que se condena al acusado es de 3 años y un día de prisión como indica la Sala de instancia.

Tal cambio de pena, aplicando la jurisprudencia anteriormente analizada, en especial la última sentencia de Pleno dictada por esta Sala implica que no ha existido infracción del principio acusatorio, ya que, resulta obligada la imposición de la pena mínima de 3 años y 1 día prevista por el legislador para el tipo penal. La corrección no ha privado a la defensa de ningún plano sobre el que proyectar una estrategia defensiva, ya que la nueva calificación se llevó a cabo al inicio del acto del juicio oral como cuestión previa planteada por el Ministerio Fiscal, y por la Acusación Particular en el trámite de calificación definitiva -presentada posteriormente por escrito a requerimiento de la Sala- y la defensa en ninguno de los citados momentos formuló objeción alguna al respecto.

Ninguna defensa cabía que pudiera conducir a una extensión de pena inferior a la impuesta, fuera de las objeciones relativas a la calificación del delito, a su grado de ejecución, a la forma de participación del responsable o a la eventual concurrencia de alguna circunstancia modificativa de la responsabilidad; elementos todos ellos que pudieron y fueron abarcados por la actividad defensiva sin restricción, ello también es acorde con la reciente Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2023, que declara: acorde al artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, la variación de pena, si hay sin información con la debida antelación al acusado de la nueva calificación considerada, en un momento y en condiciones tales que le permitan preparar eficazmente su defensa.

El motivo se desestima.

**TERCERO.- 3.1.** En el tercer motivo se denuncia infracción de Ley, al amparo del apartado 1 del artículo 849 de la L.E.Crim, por no haber sido aplicadas las eximentes del artículo 20, 1º y 4º del Código Penal, consistente, la primera de ellas, en cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, sin comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; y la segunda, en haber obrado en defensa de la persona o derechos propios o ajenos.

**3.2.** La intangibilidad del hecho probado es condición *sine qua non* para el éxito del recurso. La STS 684/2021, 15 de septiembre, apunta que cuando el motivo se articula por la vía del artículo 849.1 ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se acepten los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En definitiva, no puede darse una versión de los hechos en abierta discordancia e incongruencia con lo afirmado en los mismos, olvidando los motivos acogidos al artículo 849.1º de la LECrim ha de respetar fiel e inexcusablemente los hechos que como probados se consignan en la sentencia recurrida (en el mismo sentido, cfr. SSTs 849/13, 12 de noviembre y 614/22 22 de junio, entre otras muchas).

**3.3.** En el relato fáctico consta que " *Al ver a su esposa en el suelo y quejándose fuertemente, el Sr. Jesús María, sabiendo que se trataba de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, entró en el huerto diciendo "voy a coger una escopeta y os voy a matar a todos" y salió del interior del huerto con una horca de cinco puntas, dirigiéndola de forma amenazadora hacia los agentes e incluso tratando de clavársela al agente con número de identificación NUM000 (Sr. Eduardo) a la altura del torso, alcanzándole en el brazo derecho. El agente sufrió lesiones consistentes en erupción cutánea en la cara interna del brazo derecho, lesiones que sólo precisaron una asistencia facultativa, con una curación completa en 3 días de los que 1 fue impeditivo para sus tareas habituales sin secuelas.* "



Aplicando la anterior jurisprudencia al supuesto analizado, debemos decir, que el cauce casacional empleado tiene como presupuesto de admisibilidad el respeto al hecho probado en la medida que el único debate por el que se permite en el motivo es el de la subsunción jurídica de los hechos probados declarados por el Tribunal, que, por ello, deben ser escrupulosamente respetados por el recurrente, lo que éste incumple en la medida que los cuestiona, pues nada se hace constar en el relato fáctico sobre la actuación por legítima defensa del acusado, o a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica padecida por el mismo, extremos que no constan en los hechos probados que hemos transcrito.

El motivo decae.

**CUARTO.-4.1.** El cuarto motivo, también por infracción de Ley, al amparo del apartado 1 del artículo 849 de la L.E.Crim, muestra su discrepancia por no haber sido aplicada como muy cualificada la atenuante del artículo 21. 3º del Código Penal, consistente en obrar el Sr. Jesús María por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebatos, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.

Afirma que tiene que tenerse en cuenta que atendiendo a las circunstancias psíquicas personales, y a las circunstancias concurrentes en su mujer que se encontraba en el suelo con uno de los policías municipales -el Sr. Juan Miguel - quejándose a gritos de haber sufrido un daño importante, y la situación de su hija con minusvalía enfrentada con una policía municipal, permite la apreciación de atenuante como muy cualificada.

**4.2.** En la reciente sentencia 862/2023, de 22 de noviembre, hemos dicho que la jurisprudencia ha reiterado que la esencia de esta atenuante, radica en una sensible alteración de la personalidad del sujeto cuya reacción de tipo temperamental ante estímulos externos incide sobre su inteligencia y voluntad, mermando en relación de causa a efecto y en conexión temporal razonable, presentándose como una respuesta que puede ser entendida dentro de parámetros comprensibles en un entorno normal de convivencia. Su fundamento se encuentra en la disminución de la imputabilidad que se produce en un sujeto que se encuentra con la mente ofuscada por una pasión que en ese momento le afecta; al tiempo que se exige varios requisitos para apreciar esta circunstancia de atenuación:

i) En primer lugar, debe constatar la existencia de estímulos o causas, generalmente procedentes de la víctima, que puedan ser calificados como poderosos, y que se entiendan suficientes para explicar en alguna medida la reacción del sujeto, con lo que quedan excluidos los estímulos nimios ante los que cualquier persona media reaccionaría con normalidad.

Es en este sentido en el que ha de ser entendida la exigencia relativa a la proporcionalidad que debe existir entre el estímulo y la alteración de la conciencia y de la voluntad que acompaña a la acción. Si la reacción resulta absolutamente discordante por notorio exceso con el hecho motivador, no cabe aplicar la atenuación, pues no es posible otorgar efectos atenuatorios a cualquier reacción pasional o colérica si no está contrastada la importancia del estímulo provocador del disturbio emocional en que el arrebato consiste y que ha de tener influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia del autor.

Estímulos que además, no han de ser reprochados por las normas socio-culturales que rigen la convivencia social.

iii) En segundo lugar ha de quedar acreditada la ofuscación de la conciencia, o estado emotivo repentino o súbito, u otro estado pasional semejante, que acompaña a la acción.

iv) En tercer lugar, debe existir una relación causal entre uno y otra, de manera que la conducta sea una consecuencia de la trascendencia del estímulo.

v) En cuarto lugar, ha de existir una cierta conexión temporal, pues el arrebato no podrá apreciarse si ha mediado un tiempo entre estímulo y reacción que prudencialmente permita estimar que se ha recuperado la frialdad de ánimo.

vi) Y, en quinto lugar, que la respuesta al estímulo no sea repudiable desde la perspectiva de un observador imparcial dentro de un marco normal de convivencia.

**4.3.** El tribunal *a quo* razona que entiende aplicable la atenuante analógica de arrebatos del art. 21.3, ya que el acusado vio a su mujer en el suelo con el Sr. Juan Miguel y la escuchó quejarse a gritos de haber sufrido un daño importante en la pierna, lo que era evidente, porque tenía la pierna girada, ello junto con la *"confusión sobre qué había provocado la caída y la falsa alerta del joven del pelo largo acerca de una posible agresión previa de los agentes"*, afectó a la adecuada comprensión de la situación por el Sr. Jesús María, que como reconoció *"se vio superado"*, y *"se volvió loco"*.

Ahora bien, entiende el tribunal que la citada atenuante debe ser apreciada como simple, ya que la actuación del Sr. Jesús María fue absolutamente desproporcionada por la violencia que comportó, en concreto por el exceso de la respuesta frente al estímulo, por ello también entiende que la misma es analógica.

Criterio de la Sala que debe ser confirmado, puesto que aplicando la jurisprudencia que hemos citado, la desproporción en la reacción incluso excluye la aplicación de la atenuante, se trata de una circunstancia que requiere ya para apreciarse que los estímulos sean poderosos, y una causalidad psicológica y determinante de la acción.

Pero un criterio que define el límite de apreciación de la atenuante es la desproporcionalidad entre el estímulo recibido y la conducta realizada. Cuando la respuesta sea desproporcionada a la entidad del estímulo, se puede negar la aplicación de la atenuante, así la jurisprudencia de esta Sala Segunda ha negado la concurrencia de la atenuación a supuestos de acaloramiento, de existencia de anteriores resentimientos entre familias, el nerviosismo de la situación, la existencia de animosidad, o de actuaciones en despecho.

Además, el intangible relato fáctico de la sentencia de instancia, del que se puede desprender que el acusado pasaba por una cierta ofuscación al momento de la comisión de los hechos, no contiene ninguna referencia a que el acusado llegara a padecer una súbita afectación de sus facultades intelectivas y volitivas, que le hagan merecedor de una cualificación en la atenuación apreciada por el tribunal.

El motivo no puede prosperar.

*Recurso Macarena*

**QUINTO.- 5.1.** En el primer motivo se denuncia infracción de ley al amparo de lo establecido en el artículo 849.2º por error en la valoración de la prueba en relación con documentos obrantes en las actuaciones.

Los documentos citados al respecto son: 1º el informe médico forense emitido el 20 de abril de 2018 por la médico-forense Dña. Remedios respecto de las lesiones diagnosticadas a Macarena (Folios 589 a 591 del Tomo II del Sumario); 2º Folios 596 y 597 del Tomo II del Sumario consistente en el informe médico-forense emitido el 30 de mayo de 2018 por la médico-forense Dña. Sonia, por el cual se ratificó en el informe médico forense de sanidad de Macarena emitido el 20 de abril de 2018 por la médico-forense Dña. Remedios; y 3º Folios 468 a 469 vuelto del Tomo I del Sumario 5/2019-J de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 7ª, consistente en el informe médico-forense de sanidad emitido el 17 de marzo de 2021 por los médicos forenses D. Marino y Dña. Rocío respecto a Macarena.

Consecuencia de lo anterior, entiende que debe ser incluido en el relato fáctico, la existencia en la recurrente de una severa pérdida de la autonomía personal, lo que afectaría a la calificación de los hechos como delito de lesiones del art. 149 CP.

**5.2.** Debemos recordar, por ejemplo, con la STS 442/2021, de 25 de mayo, que por la vía del art. 849.2 LECrim., se circunscribe el motivo al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza por si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.

En relación al motivo planteado, la doctrina de esta Sala, recordada entre otras en nuestra sentencia 138/2019, de 13 de marzo (SSTS. 936/2006 de 10 de octubre y 778/2007 de 9 de octubre, entre otras muchas), viene exigiendo para su prosperabilidad la concurrencia de los siguientes elementos: 1) Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales, aunque estén documentadas en la causa; 2) Ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; 3) Que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal, art. 741 LECrim. 4) Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Los informes periciales, no son literosuficientes para evidenciar el error en la valoración de la prueba que se denuncia. El primer requisito que exige el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es que el error surja de forma incontestable del particular de un documento. Este carácter no puede atribuirse, como se ha dicho, a las pruebas personales. En cuanto a la prueba pericial, esta Sala ha señalado en numerosas ocasiones que, en realidad, se trata de una prueba personal, aunque excepcionalmente le haya reconocido virtualidad

para permitir la alteración del relato fáctico cuando el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario o bien cuando haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen.

**5.3.** Los informes periciales citados como documentos por la recurrente no tienen la naturaleza pretendida.

Por el tribunal de instancia se analizan todas las periciales practicadas a las que hace referencia la recurrente de forma pormenorizada, como pruebas personales que son, preguntando en el plenario a cada uno de los médicos que elaboraron los informes, sobre los mismos y si mantenían sus conclusiones o no, indicando que, todos ellos, hacen referencia a la cirugía paliativa llevada a cabo en el año 2017, que fue exitosa según la Dra Remedios, quien tras el visionado del vídeo correspondiente a los días 23 a 29 de julio de 2020, tomado por el detective privado contratado por el Ayuntamiento de Moncada, cambia su informe, e indica que la recurrente ahora tiene una deambulaci3n autónoma, prácticamente, haciendo referencia a que en el vídeo se ve cómo puede caminar, por lo que ahora no mantendría una severa pérdida de autonomía, el grado severo quizás no existiría.

También se indica que los doctores Marino y Severino, pusieron de manifiesto la falta de colaboraci3n de la Sra. Macarena lo que dificulta el diagnóstico de pérdida de autonomía, además, tras ver el vídeo del detective privado indican que no persiste la paresia, que la lesionada puede caminar, y que la conclusi3n que mantienen es que la paciente puede hacer una vida normalizada.

Como consecuencia de lo expuesto, no estamos ante un error documental, porque los informes citados, no tiene esa naturaleza, de los mismos no se desprende de forma incuestionable, como se pretende, la existencia en la recurrente de una severa pérdida de la autonomía personal, estamos ante una prueba personal y, además, tras la práctica de la misma los peritos rectificaron sus informes en el plenario, por lo que no podemos concluir que el tribunal omitió erróneamente declarar probado el citado extremo.

El motivo es improsperable.

**SEXTO.-** En el segundo motivo se denuncia infracci3n de ley, art. 849.1º LECrim, por falta de aplicaci3n del art. 149 CP.

En el desarrollo del motivo se indica que no puede haber duda de que, según lo narrado en el relato fáctico, la conducta del agente Juan Miguel es constitutiva del delito de lesiones del art. 149 del CP.

Como hemos indicado el motivo por infracci3n de Ley del artículo. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la vía adecuada para discutir ante este Sala si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley. Pero siempre partiendo del relato fáctico que contiene la sentencia, sin alterar, suprimir o ańadir los hechos declarados probados por el Tribunal de instancia.

En el caso se hace constar que " *Simultáneamente y al ver ese incidente, la madre de la joven implicada, la procesada Dña. Macarena, se dirigi3 rápidamente y gritando que dejaran a su hija, hacia donde ésta se hallaba. Para impedirle el paso, el agente de la policia local D. Juan Miguel se situ3 en su camino con los brazos en alto, ordenándole que se detuviera. La Sra. Macarena lo arroll3, cayendo ambos al suelo y haciéndolo en mala postura la Sra. Macarena, motivo por el que sufri3 lesiones en su rodilla derecha consistentes en luxaci3n traumática por caida en valgo forzado, fisura del menisco interno, rotura del ligamento cruzado anterior y posterior y del complejo colateral, lesi3n del nervio ciático poplíteo interno y parte del externo y ausencia de flujo en la arteria poplíteo derecha. En la caida al agente Sr. Juan Miguel se le rompi3 la pantalla del móvil.* "

La denuncia no puede prosperar. Según jurisprudencia reiterada de esta Sala se estima que obra con dolo quien, conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante actúa y continúa realizando la conducta que somete a la víctima a riesgos sumamente relevantes que el agente no tiene seguridad alguna de poderlos controlar o neutralizar, sin que sea preciso que persiga directamente la causaci3n del resultado, el delito de lesiones sí que requiere el *animus laedendi*, siendo necesario que el acusado se represente la probabilidad del resultado acaecido, asumiéndolo y aceptándolo, lo que no se desprende del relato fáctico, en el que, por el contrario consta que el agente solo se situ3 en el camino de la recurrente "con los brazos en alto, ordenándole que se detuviera", pero también declara probado que fue la Sra. Macarena quien arroll3 al agente, y que cayendo ambos al suelo y haciéndolo en mala postura la Sra. Macarena.

El motivo se desestima.

**SÉPTIMO.-** Procede imponer las costas a los recurrentes ( art. 901 LECrim).



## FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

**NO HABER LUGAR** a los recursos de casación interpuestos por las representaciones procesales de Macarena y Jesús María , contra la sentencia nº 597/2021, de fecha 3 de septiembre de 2021, dictada por la Sección nº 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el Rollo Sumario nº 5/2019-J; con imposición de costas a los recurrentes.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ